



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

EXPTE. NRO: 39116/2016

AUTOS: “PERUZZO, JORGE LUIS c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMP. Y SEGURIDAD SCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

Llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación obrante a fs. 41/44 contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de Fiscalización del MTEySS, obrante a fs. 37/39 que impuso una multa al quejoso, en virtud de las infracciones cometidas al artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683.

Que notificada de ello, se hizo saber a la rubrada, que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 10 inc. b) de la Resolución METySS N° 655/05 y sus modif..

Que a fs. 73, el organismo ministerial ordenó la remisión de los presentes obrados sin informar el cumplimiento del requisito de previo pago de la multa impuesta, en los términos del art. 15 de la ley 18.820 y art. 10, inc b) de la Resolución MTSS 655/2005, a los fines de la apertura de la instancia judicial.

Que no obstante la omisión apuntada, la aquí accionante, en su escrito recursivo, deduce la inconstitucionalidad de la exigencia del “solve et repete”, a la luz – fundamentalmente- de los preceptos que emergen de los tratados incorporados al plexo constitucional a partir de la reforma de 1994, al tiempo que plantea la imposibilidad de ingresar el monto exigido.

Que, en orden a la cuestión debatida en estas actuaciones, en primer término cabe señalar que el artículo 36 de la ley 25.877 faculta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a verificar y fiscalizar en todo el territorio nacional, el cumplimiento por parte de los empleadores de la obligación de declarar e ingresar los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, que integran el Sistema Único de la Seguridad Social, sin perjuicio de las facultades concurrentes con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Que contra las resoluciones dictadas en el marco de la norma, el sancionado se encuentra habilitado a recurrir ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, en la forma, modo y plazos fijados en el artículo 9° de la Ley N° 23.473 y sus modificatorias, estableciendo como condición previa para acceder al recurso de apelación el pago de la multa impuesta, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 18.820 y sus modificaciones.

Que así las cosas en relación al planteo introducido, el Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que si bien el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, ello no importa una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57 entre otros), pues existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (CSJN., Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos S.A. s/Impugnación actas de inspección”, sent. del 25.3.86, y específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, consid. IV), el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287 consid. 10).

En el mismo orden, si bien el Alto Tribunal admitió la plena operatividad de las previsiones del art. 8 inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, norma sustancialmente análoga al art. 18 de la C.N. señaló que, pese a ello, aquellas no desplazan ni derogan las directivas del art. 15 de la ley 18.820 - del entonces vigente - art. 12 de la ley 21.864 en cuanto establecía la obligación de depositar los aportes omitidos, su – actualización

~~monetaria, recargos e intereses para acceder a la instancia judicial, salvo que el interesado~~





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

afirme y pruebe que el exigido como depósito previo resulta exorbitante desproporcionado con su concreta capacidad económica. Similar temperamento fue adoptado por el Máximo Tribunal, en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar el art. 15, segunda parte, de la ley 18.820 (ver Fallos 215:225 501 ; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 240; 296:40 57; 307:1753).

Que evaluadas la constancias aportadas por el quejoso, corresponde tener por acreditada la imposibilidad del ingreso en relación a su capacidad económica, por lo ha de ser exceptuado del pago previo de la sanción impuesta.

Atento ello, la cuestión a resolver se circunscribe a la procedencia del pedido de caducidad del procedimiento administrativo formulado por el administrado, puesto que sobre las circunstancias que motivan la sanción impuesta –personal realizando tareas en el establecimiento sin la debida registración-, nada manifiesta en la instancia administrativa ni en oportunidad de esgrimir los agravios que motivan la intervención de este Tribunal.

Que en efecto, como consecuencia de la notificación sobre el resultado del relevamiento efectuado, el titular de la razón social se presenta a la audiencia de descargo de fecha 8 de marzo de 2012, celebrada en los términos del art. 5 y concordantes de la resolución 655/05 y sólo manifiesta que: “quiero dejar en claro que las pruebas la ingresaré por mesa de entradas”.

Que entre ese acto y la resolución obrante a fs. 18/21 de fecha 21/11/12 que impuso la multa cuestionada, no obra agregada ningún tipo de documentación.

Así las cosas, se dicta la pertinente resolución y, notificado de la sanción a fs. 26 se presenta el letrado apoderado de la actora, solicita vista y suspensión de términos, petición que es admitida por el plazo de 10 días a computarse desde el 30 de abril de 2013 (ver fs. 28/29).

A fs. 31/32, se plantea la nulidad del acto en la inteligencia de haberse producido la caducidad del procedimiento en virtud del transcurso de los plazos previstos por el art. 10 de la ley 18.695. Subsidiariamente dedujo recurso de reconsideración y, para el caso que no se admita el mismo, recurso de apelación solicitando, expresamente, la elevación al Juez Federal de Tucumán (ver fs. 31 vta.).

Que organismo desestimó el planteo, por cuanto son exceptuados de la aplicación del instituto referido aquellos trámites donde estuviese comprometido el interés público como es el caso del acto administrativo que se encuentra en crisis en el presente sumario.

Contra ello se dirige el recurso obrante a fs. 41/44, que sobre el particular insiste en la caducidad del procedimiento administrativo en tanto los plazos legales son perentorios e improrrogables para todas las partes de un proceso, en apoyo de su tesitura refiere la existencia de antecedentes jurisprudenciales de la “Corte Federal”, sin precisar demás datos.

En primer lugar ha de señalarse que el instituto de la caducidad el procedimiento se haya reglado por el art. 1 inc. 9 de la ley 19.549 que en lo que aquí interesa expresamente consigna “Transcurridos sesenta (60) días desde que un trámite se paralice por causa imputable al administrado, el órgano competente le notificará que, si transcurrieren otros treinta (30) días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos, archivándose el expediente.”. De la lectura de la norma, se colige sin duda alguna, que los únicos procedimientos que podrían caducar son los promovidos por el interesado o bien aquellos que iniciados por la administración, su prosecución dependa de una acción del administrado. No se advierte posibilidad alguna de admitir la caducidad del procedimiento por hecho imputable a la administración.

Asimismo, de las constancias obrantes, se desprende que el propio organismo pudo haber referido a dicho instituto, si se tiene en cuenta que según lo indica la resolución 655/05 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el contribuyente deberá ofrecer y producir la prueba en la audiencia de descargo prevista en el artículo 3º inciso D), correspondiéndole a él sin excepción alguna la carga de aquélla.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

En el mismo acto la autoridad de aplicación dispondrá la producción de la prueba ofrecida que resulte conducente para la resolución de las actuaciones, rechazando en forma fundada, aquella manifiestamente improcedente, superflua o meramente dilatoria.

En lo que respecta a la prueba testimonial, no podrán ofrecerse más de CINCO (5) testigos. En caso que sea ofrecida prueba informativa, el interesado deberá acreditar el diligenciamiento de los oficios respectivos dentro del plazo de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de darle por decaído el derecho a producirla con posterioridad.

De ello y las constancias de la causa, se colige que el vencimiento de los plazos operó en favor del organismo quién, lejos de apresurar su resolución, prudencialmente extendió considerablemente el término indicado hasta la resolución aquí cuestionada.

Por ello lo expuesto el Tribunal **RESUELVE**: 1) Declarar formalmente admisible el recurso interpuesto y disponer su rechazo; y 2) sin costas en la Alzada. Por disposición del Tribunal, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p. 4 y conc.). Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).

